

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



JUZGADO NOVENO DE FAMILIA BOGOTÁ D.C. EN ORALIDAD

Bogotá D.C, Diez (10) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia. **Medida de Protección**

Radicación: **2021-00619**

M.P 504-2020 RUG 1219-2020

Procede el Despacho a pronunciarse respecto a la solicitud de expedición de orden de arresto por conversión de la multa impuesta al señor **JOHN FREDY CRUZ CARO** realizada por la Comisaría Once de Familia – Suba 2, de conformidad con lo previsto en el artículo séptimo de la ley 575 de 2000, modificado por el Decreto 4799 de 2011.

ANTECEDENTES

La Comisaría Once de Familia – Suba 2, mediante resolución de fecha 12 de julio de 2021 impuso sanción al accionado, consistente en el pago de una multa equivalente a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, la que debía consignar en el término de 5 días siguientes a la ejecutoria de la providencia, sanción que fue confirmada por este estrado judicial mediante decisión del 22 de octubre de 2021.

Se avizora dentro del expediente que el señor **JOHN FREDY CRUZ CARO** fue debidamente notificado mediante fijación por aviso a la última dirección aportada por éste.

Mediante escrito de fecha 26 de noviembre de 2021, el señor **JOHN FREDY CRUZ CARO** solicita ante la autoridad administrativa que se pueda acceder a un plazo frente a la multa equivalente a cuatro (04) salarios mínimos legales mensuales vigentes, debido a que, su menor hija depende económicamente de él y que su trabajo es el único sustento económico de su hogar.

El 06 de diciembre de 2021, la Comisaría de Familia generó una respuesta definitiva al accionado manifestando dentro de su escrito lo siguiente:

"(...) doy respuesta al mismo informándole que Las Leyes 294 de 1996 y 575 de 2000 son taxativas y Claras respecto de la imposición de multas por incumplimiento a las medidas de protección, por tanto no contemplan la posibilidad de sufragar las mismas en plazos, tampoco la exención de su pago por razones de capacidad económica, antecedentes judiciales, edad o condición especial de quien debe sufragarlas. Por consiguiente, su solicitud de acuerdo de pago a la multa a usted impuesta, no resulta viable para el Despacho(...)".

CONSIDERACIONES

Toda persona que sea víctima de violencia Intrafamiliar está amparada por las medidas de protección que establece la Ley 294/96 en consonancia con la Ley 575/2000 y el Decreto Reglamentario 652/2001.

Por conducto de la Leyes y Decreto en comento, que desarrolla el Art. 42 de la Constitución Política Nacional, el legislador tuvo como propósito prevenir y erradicar la Violencia intrafamiliar, por mínima que sea, a través de medidas educativas, protectoras y sancionatorias, posibilitando así a las personas recurrir a medios civilizados para la solución de sus conflictos, como la conciliación, el dialogo y las vías judiciales, y evitar la respuesta violenta.

Por tanto, es deber del Estado intervenir en las relaciones Familiares, con propósito de imponer un modelo determinado de comportamiento, para impedir cualquier violación de los derechos fundamentales de las personas.

Consagra el artículo 7º literal a de la Ley 294 de 1.996, modificado por el art.4º de la Ley 575/2000, que la conversión en arresto de la multa impuesta, se adoptará a razón de tres (3) tres días por cada salario mínimo.

Igualmente establece el literal b de las citadas Leyes, que "sí el incumplimiento a las medidas de protección se repitiere en el plazo de dos años, la sanción será de arresto entre treinta y cuarenta y cinco (45) días.

En el caso de incumplimiento de medidas de protección impuestas por actos de Violencia o maltrato que constituyeren delito o contravención, al agresor se le revocaran los beneficios de excarcelación y subrogados penales de que estuviere gozando".

De otra parte, el art. 8 de la Ley 294 de 1.996, dispone *“todo comportamiento de la relación, venganza o evasión de los deberes alimentarios por parte de agresor, se entenderá como incumplimiento de las medidas de protección que le fueron impuestas”*.

A su vez el art. 17 de la Ley 294 de 1.996, modificado por la Ley 294 de 1.996, modificado por el art. 11 de la Ley 575 de 2000, expone que cuando a juicio del Comisario, sea necesario orden de arresto, le pedirá al Juez de Familia o Promiscuo de Familia, o en su defecto, al Civil Municipal que expida la orden correspondiente.

Según el artículo 1º del Decreto reglamentario 652/2001 *“de conformidad con el artículo 11 de la Ley 575/2000, la orden de arresto prevista se expedirá por el Juez de familia o Promiscuo de Familia, indicando el lugar y término de reclusión.*

Para su efectivización se remitirá oficio al comandante de policía municipal o distrital según corresponda con el fin de que se conduzca al agresor al establecimiento de reclusión y se comunicará a la autoridad encargada de su ejecución, así como al comisario de familia si éste ha solicitado la orden de arresto”.

Así mismo, el Artículo 6º del Decreto 4799 de 2011 establece: *“De conformidad con lo previsto en los artículos 7º y 11 de la Ley 294 de 1996, modificados por los artículos 4º y 6º de la Ley 575 de 2000, en caso de incumplimiento de las medidas de protección definitivas o provisionales, se adelantarán las siguientes acciones: a) Las multas se consignarán en las tesorerías distritales o municipales, con destino a un fondo cuenta especial que deberá ser creado por cada entidad territorial, de conformidad con las normas jurídicas, para cubrir costos de los centros o programas de asistencia legal o de salud para las mujeres víctimas de violencia. b) El arresto procederá a solicitud del Comisario de Familia y será decretado por el Juez de Familia, o en su defecto, por el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal quien deberá ordenarlo en la forma prevista en el artículo 11 de la Ley 575 de 2000 en concordancia con el artículo 12 del Decreto 652 de 2001 y disponer su cumplimiento, comunicando a la Policía Nacional para que proceda a la aprehensión de quien incumplió, y al posterior confinamiento en establecimiento de reclusión, sin que sea posible sustituirlo por arresto domiciliario”*.

Al tenor de la norma antes citada, e igualmente en acatamiento a lo dispuesto en el Artículo 28 de la Carta Política, según el cual, la privación de la libertad no puede efectuarse “*sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente*”, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley, de conformidad con las anotaciones jurisprudenciales, es este despacho judicial el competente para proferir la orden de arresto y señalar el lugar de retención del demandado en el presente asunto.

A su turno, conviene señalar lo expuesto por la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil sentencia del 11 de mayo de 2020 radicado No. 11001-22-10- 000-2020-00126-01 M.P. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA, en la cual se indicó:

“(…) Carecer de solvencia, no equivale a incumplir, voluntariamente, la sanción y, en consecuencia, el juez no puede obrar como un autómata, escudado en la falta de regulación expresa, para los asuntos de familia, de mecanismos alternos, por medio de los cuales conciliar la imposibilidad económica del sancionado, con la materialización del castigo.

En ese sentido, **la última opción para el funcionario judicial, ante circunstancias como las aquí estudiadas, debe ser la conversión en arresto, dados los nocivos efectos de ese tipo de determinaciones,** tanto para el denunciado, que ha mostrado interés en observar las disposiciones dictadas en su contra, al punto de proponer la suscripción de un acuerdo de pago o la concesión de plazos para ponerse al día con el correctivo pecuniario; como para su propia familia, en especial, cuando de su aporte alimentario, penden los derechos de menores de edad.

(...) En ese orden de ideas, es claro que cualquier tipo de afrenta hacia tales garantías, amerita el respectivo castigo, **pero ello conlleva la selección de mecanismos adecuados, encaminados a solventar, eficazmente, la ausencia de recursos económicos, cuando en eso consiste el correctivo, con el fin de posibilitar su cumplimiento, sin afectar prerrogativas como la libertad personal, si las circunstancias concretas, no lo requieren.** Dicho de otro

modo, la administración de justicia no puede tolerar agresiones contra la mujer u otro tipo de grupos especialmente protegidos, empero, debe emprender la búsqueda de formas de convivencia tolerantes, racionales y democráticas, al exigir la ejecución de sus decisiones" (Negrilla y subrayado fuera del texto)

Así las cosas, procede el Despacho a estudiar la solicitud elevada por el señor **JOHN FREDY CRUZ CARO**, conforme a lo establecido por la jurisprudencia y normas que anteceden, relacionada con amortizar por cuotas el pago de la sanción monetaria que le fue impuesta por la Comisaría Once de Familia – Suba 2 de esta ciudad mediante el acto administrativo del fecha 12 de julio de 2021, que declaró probado el primer incumplimiento a la medida de protección a favor de la señora **CAMILA ANDREA PEÑA BUSTOS**.

Ahora bien, en primer lugar se encuentra que el señor **JOHN FREDY CRUZ CARO** mediante escrito dirigido a la Comisaría de Familia de origen, solicitó "*un plazo o algún tipo de financiamiento*" en relación con la sanción que le fue impuesta, argumentando que no cuenta con los suficientes recursos económicos para realizar el pago en su totalidad.

Como respuesta a lo anterior, mediante escrito del 06 de diciembre de 2021, la Comisaría de Familia de origen nombró al incidentado las normas reguladoras del presente asunto, para concluir que, no era posible acceder a lo solicitado, por lo cual, procederían a darle el trámite legal de rigor relacionado con la conversión de la multa en arresto por parte de la autoridad judicial.

Conforme a lo expuesto, a criterio del Despacho, en el caso sub examine se encuentran reunidos los elementos necesarios para proceder conforme a la petición elevada por el señor **JOHN FREDY CRUZ CARO**, quien acreditó no solamente no contar con los medios económicos necesarios para cancelar la multa que le fuere impuesta como consecuencia de haber desacatado la medida de protección a favor de la señora **CAMILA ANDREA PEÑA BUSTOS**, sino que afectaría gravemente su estabilidad laboral y familiar.

Así las cosas, se procederá a fijar un plazo de doce (12) cuotas mensuales cada una por un valor de \$ 302.842.00, para que sea cancelada la totalidad

de la multa impuesta en contra del señor **JOHN FREDY CRUZ CARO**, esto es, cuatro (04) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes los cuales ascienden a un valor de \$ 3.634.104.00, mismas que resultan proporcionales y que no afectan el mínimo vital del incidentado, ni tampoco implican un menoscabo al interés superior de su menor hija, dineros que deberán ser consignados a despensas de la Comisaría Once de Familia – Suba 2 de esta ciudad como le fue ordenado en la providencia respectiva a más tardar el día 15 de cada mes.

Teniendo en cuenta que la Ley establece que la multa será convertida en arresto a razón de tres (3) días por cada salario mínimo, en caso de que el incidentado llegase a incumplir alguna de las cuotas fijadas, deberá proferirse una nueva orden de conversión de multa en arresto en la que se descuente proporcionalmente de los días de arresto el valor pecuniario que haya sido cancelado por el accionado y, así mismo, el arresto se proferirá con orden al saldo que adeude a la fecha del incumplimiento.

En virtud de lo anterior, la Comisaría de Familia debe fijar un plazo de doce (12) meses para que el incidentado pueda cancelar en su totalidad el monto ordenado mediante proveído de fecha 12 de julio de 2021.

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE BOGOTA D.C.**, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: OTORGAR plazo de doce (12) meses al incidentado para cancelar la multa que le fue impuesta por la Comisaría Once de Familia – Suba 2 el día 12 de julio de 2021, la cual asciende a cuatro (04) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En cuotas de \$302. 842.00 que deberán ser consignados a despensas de la Comisaría de Origen hasta completar el valor de \$ 3.634.104. 00 es decir la suma de la sanción impuesta teniendo en cuenta el valor del Salario Mínimo en el año 2021.

SEGUNDO: ORDENAR a la Comisaría Once de Familia – Suba 2 supervisar a cabalidad el cumplimiento del pago de la multa en los términos acá estipulados, en caso de incumplimiento proferir la conversión de multa en arresto de forma proporcional al saldo adeudado por el incidentado.

TERCERO: ORDENAR a la Comisaría Once de Familia – Suba2 que, una vez se acredite completamente el pago decretar el cumplimiento de la sanción que fue interpuesta en contra del señor **JOHN FREDY CRUZ CARO**.

CUARTO: DEVOLVER las diligencias a la Comisaría de origen, una vez se encuentre ejecutoriada la presente providencia.

NOTIFÍQUESE



CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ

JUEZ

JUZGADO NOVENO (9) DE FAMILIA DE BOGOTÁ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO – SECRETARÍA

Bogotá D.C., **11 de Abril de 2023**

El auto anterior queda notificado a las partes por anotación
en el ESTADO No. 55

ALISSON SANTAMARÍA CÁRDENAS

Secretaria

AP